

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL MIÉRCOLES OCHO DE AGOSTO DE 2018.

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con diez minutos del miércoles ocho de agosto del año dos mil dieciocho, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su Décima Sexta Sesión Extraordinaria del año dos mil dieciocho.

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Jesús Manuel Ponce Salas, por instrucciones del Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos.

El 06 de junio de 2018, a través del Sistema de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se notificó el recurso de revisión correspondiente al expediente RRA 1973/18, respecto de la solicitud de información folio 1816400066618, en la que solicitaban:

ANTECEDENTES**I. De acuerdo con la solicitud 1816400066618, la información solicitada fue la siguiente:**

(Transcripción original) "SOLICITO CUALQUIER EXPRESION DOCUMENTAL QUE DE CUENTA DE LA PROBLEMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EN RELACION AL RAMAL TULA DONDE CAMPESINOS QUEJOSOS BLOQUEAN EL AVANCE DE LA OBRA DE LA EMPRESA ATCO GAS SERVICIOS Y ENERGIA DE NOVIEMBRE 2014 A LA FECHA DE LA SOLICITUD EL DOCUMENTO NO PUEDE OMITIR LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE HAN ASISTIDO O ESTADO PRESENTE EN CUALQUIER TIPO DE REUNION CON LOS QUEJOSOS DONDE EXISTAN ADEMÁS ACTAS Y ACUERDOS ENTRE LA EMPRESA Y LOS QUEJOSOS. NO NECESITO LOS NOMBRES DE LOS QUEJOSOS SINO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTES EN LAS DILIGENCIAS PARA RESOLVER EL CONFLICTO" (Sic)

II. La respuesta que la CFE dio a dicha solicitud fue:

(Transcripción original) "Se elabora la presente constancia, y se transcribe la respuesta aprobada por el Comité de Transparencia; la cual fue proporcionada por el área competente de la **Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales**, de esta Comisión.

"Oficina del Abogado General

En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que, en la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, se cuenta con documentales (notas informativas), relacionadas con su requerimiento.

Documentales que constituyen información clasificada como RESERVADA por encontrarse vinculadas con un procedimiento de Arbitraje (número 173641), radicado en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of International Arbitration). Procedimiento que no ha causado estado, encontrándose en la etapa Memorial de Demanda, que consiste en la elaboración de los escritos de demanda y respuesta.

Las documentales en cuestión constituyen medios estratégicos dentro del procedimiento pues esta Comisión puede o no hacer valer en su defensa su contenido.

Lo anterior con fundamento en el artículo 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé:

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

... "Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas que indica:

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

- I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
- II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;
- III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
- IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, es el caso de la información solicitada a que hace referencia el solicitante..."

En términos de las disposiciones transcritas, podrá clasificarse como información reservada, bajo el argumento de estrategia procesal, aquella relacionada con las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que intervienen en procesos judiciales, administrativos o arbitrales, hasta en tanto la resolución respectiva no cause estado.

En dicho sentido, se estima que sí existe la estrategia procesal de la Comisión que pudiera verse perjudicada con la difusión de la información en cuestión, la cual contiene aquellas acciones y decisiones que implementará, como parte de su táctica, para provocar en la convicción del juzgador que conoce del arbitraje y la acreditación de sus pretensiones, es decir, su divulgación infiere de forma directa en los resultados que se obtengan en el procedimiento. Asimismo, es de precisarse que la información contenida en las documentales se encuentra directamente relacionada con las acciones y decisiones implementadas por esta Empresa Productiva del Estado en el proceso arbitral dentro de la instancia internacional y por lo tanto encuentra ahí sus razones de reserva, hasta en tanto la resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria.

Es evidente entonces, que la divulgación de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad, en una situación de desventaja en un arbitraje que se encuentra en curso, alterando así la conducción y actuaciones arbitrales.

Con su difusión necesariamente traería por consecuencia la interrupción, menoscabo o inhibición en el diseño de la negociación e implementación de los asuntos sometidos a deliberación en el arbitraje.

Finalmente, es de hacer notar que esta Empresa Productiva del Estado, se encuentra obligada a guardar reserva por virtud de lo siguiente:

39.3 Arbitraje. Todas las controversias que surjan en relación con el presente Continuo, distintas a las controversias técnicas, que se resolvieren de conformidad con la Cláusula 39.2, deberán ser resueltas exclusiva y definitivamente de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por tres árbitros, uno elegido por cada una de las Partes; el tercer árbitro será nombrado por las Partes o por los árbitros ya nombrados y a falta de acuerdo por el Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of International Arbitration). Los árbitros preferentemente serán mexicanos y también preferentemente deberán conocer el derecho mexicano. La sede del arbitraje será la Ciudad de México, D.F., y se conducirá en idioma español. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje será la estipulada en la Cláusula 39.1; la Ley Aplicable al procedimiento será el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y, en caso de silencio de éste, por las normas que las Partes o, en su defecto, el Tribunal arbitral, determinen. Las actuaciones arbitrales serán confidenciales y así se acentará en el acta de sesión correspondiente, o bien en cualquier otro documento o actuación procesal, por la que cualquier persona que participe en el mismo deberá guardar reserva. Se entiende que el tribunal arbitral deberá aceptar como obligatorias las determinaciones, si las hubiere, del Perito respecto de aspectos técnicos dentro de su competencia, si no hubiere irregularidades en la designación del mismo, error manifiesto, fraude o mala fe, pero el Tribunal Arbitral tendrá jurisdicción para determinar si el Perito actuó dentro del alcance de su competencia o si existe error manifiesto, fraude o mala fe en sus determinaciones.

Fecha de clasificación: 20 de marzo de 2018

Periodo: 5 años.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura

En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que no es del ámbito de competencia de esta Dirección, por lo que se sugiere remitirlo a CFE Energía y la Oficina del Abogado General.

Dirección Corporativa de Administración

Con relación a la solicitud, se informa que la Gerencia de Desarrollo Social no participó en los eventos requeridos por el solicitante.

Dirección Corporativa de Operaciones

En atención a su solicitud, se hace del conocimiento que esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con ninguna información relativa a la problemática mencionada en su solicitud, en la cual se encuentren mencionados trabajadores de esta Comisión Federal de Electricidad.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales

Se informa que en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no existe información relacionada con la problemática en el municipio de Atotonilco de Tula Hidalgo en relación al Ramal Tula."

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente:

"No es competencia de CFE Distribución por lo que se sugiere consultarlo con la Oficina del Abogado General." (Sic)

III. El 02 de junio de 2018 el Instituto recibió por parte del recurrente, la impugnación de la respuesta antes citada, en los siguientes términos:

(Transcripción original) "IMPUGNO LA CLASIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO. SOLICITO CUALQUIER EXPRESIÓN DOCUMENTAL QUE DE CUENTA DE LA PROBLEMÁTICA, LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN NO PUEDE SER CLASIFICADA Y MENOS LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN ASISTIDO AL CONOCIMIENTO DEL CONFLICTO REFERIDO EN HIDALGO, REITERO LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN EN SUS TÉRMINOS Y SOLICITO QUE EL INAI REVISE CONTUDENTEMENTE LA CLASIFICACIÓN QUE INVOCA LA CFE SOBRE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.." (Sic)

IV. Ante lo que el Pleno del INAI, en sesión de fecha 29 de junio de 2018 instruyó:

(Transcripción original) "...este Instituto considera procedente **modificar** la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le **instruye** para que:

a) Emita, mediante su Comité de Transparencia, el acta mediante el cual confirme la reserva de la siguiente información: *

1. Los expedientes de amparo 673/2015- 3, 1410/2015, 1335/2015-V, 2/2016-I-A, 891/2015-I-A, 1167/2015-II y 869/2015-III-A, en virtud de que éstos continúan en trámite, de conformidad con la fracción XI del artículo 110 de la Ley de la materia.

2. La solicitud de arbitraje y la respuesta a la solicitud de arbitraje, con fundamento en la fracción XI del artículo 110 de la Ley de la materia.

3. Las notas informativas, las actas de las mesas de control y las minutas, con fundamento en la fracción X del artículo 110 de la Ley de la materia.

b) Proporcione al particular las constancias con las que cuente respecto de los expedientes de los juicios de amparo 1174/2015-III-A, 755/2015-V-A, 868/2015-II-A, 674/2015-II, y 695/2015-V-B.

Al respecto, es importante señalar que en caso de que los documentos en comento pudieran contener información confidencial, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado, con aprobación de su Comité de Transparencia, deberá generar una versión pública de conformidad con lo previsto en los artículos 102, 108, 118, 137 y 140 de la Ley de la materia, así como lo previsto por los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas. Además, su Comité de Transparencia deberá emitir un acta en la que confirme la versión pública generada, de manera fundada y motivada, y hacerla del conocimiento de la particular..." (Sic)

V. Ante lo que la Oficina del Abogado General informó lo siguiente:

(Transcripción original) "...Se solicita al Comité de Transparencia confirme la clasificación como reservada de:

a) Expedientes de amparo identificados 673/2015-3, 1410/2015, 1335/2015-V, 2/2016-I-A, 891/2015-I-A, 1167/2015-II y 869/2015-III-A; ya que se advierte que los citados juicios han sufrido diversos diferimientos de la audiencia constitucional, las cuales no se han realizado. En ese tenor, se advierte que estos expedientes se encuentran en trámite, bajo las siguientes consideraciones:

- Asimismo, se precisa que la publicidad de los expedientes de los juicios de amparo anteriormente señalados, conllevaría un **riesgo real** respecto de su debida conducción, puesto que los mismo reflejan la totalidad de las actuaciones de las partes y del juzgador que se encuentran directamente ligados con la litis del juicio, lo que permitiría que terceros ajenos a los juicios, estén en condiciones de introducir elementos que modifiquen la libre determinación del juzgador.

- Hacer del conocimiento los expedientes de amparo en trámite, previo a que los juicios se resuelvan, conllevaría un **riesgo demostrable** a la debida conducción del expediente judicial, puesto que implicaría divulgar de manera anticipada los hechos materia de controversia, los cuales al estar identificados en el expediente, permitiría que otras personas realicen actos tendientes a modificar los hechos descritos en los expedientes.

- Derivado de que están en trámite los expedientes de los juicios de amparo, la sola divulgación de la información, representaría un **riesgo identificable** a la vulneración de la conducción de los expedientes identificados; ya que al conocer el alcance de su contenido, permitiría que actores ajenos al juicio, puedan inferir en el ánimo del juzgador, y consecuentemente, la difusión podría generar un riesgo para 1) el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes, 2) la autonomía de los jueces, y 3) la libertad deliberativa por parte de la autoridad decisora.

Por lo que se considera información **reservada** de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 110, fracción XI** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un plazo de **3 años**.

2. La solicitud de arbitraje y la respuesta a la solicitud de arbitraje, con fundamento en la fracción XI del artículo 110 de la Ley de la materia: ya que de conformidad con lo previsto en el artículo 1, incisos a y b del Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, establece el contenido que debe contener la respuesta a la solicitud de arbitraje, la cual debe contener la aceptación o el rechazo total o parcial de las pretensiones de la Demandante contenidas en la solicitud, así como una exposición sucinta de la naturaleza y circunstancias de la demanda reconventional que la Demandada pretenda formular contra la Demandante.

Aunado a ello, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de la Corte Arbitral, se establece que salvo acuerdo por escrito expreso en contrario de las partes, éstas, como principio general, **se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los laudos dictados en el curso del arbitraje, así como la de toda la documentación que obre en el procedimiento y de cualesquier otros documentos presentados por otra parte litigante que no sean de dominio público.**

Así, se advierte que el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres permite el resguardo de la información que solo le atañe a las partes para una adecuada deliberación de la Corte Arbitral, libre de injerencias.

Se precisa que la solicitud de arbitraje, así como la respuesta a la solicitud de arbitraje, son constancias propias del expediente del procedimiento arbitral sustanciado en Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por lo que se acredita el segundo elemento requerido para que se actualice la fracción XI del artículo 110 de la Ley de la materia.

- La publicidad de la información señalada, conllevaría un **riesgo real** a la debida conducción del expediente de arbitraje, puesto que dicho documento se encuentra relacionado directamente con la litis del juicio, consistente en la determinación de la responsabilidad del incumplimiento del contrato para la construcción del gasoducto. Esto es así porque la documental pretendida constituye uno de los elementos determinantes del estudio y de la construcción de la resolución de dicho conflicto y, en consecuencia, con la sola publicidad de la solicitud y de la respuesta a la solicitud de arbitraje, es posible vulnerar la debida conducción o consecución del procedimiento, en el entendido que tal documental contiene las narraciones de los hechos, las pretensiones de la empresa, así como la respuesta a dichos puntos por parte de esta CFE. En otras palabras, los documentos referidos revisten tal fuerza en el proceso, que si resulta posible su clasificación, porque su divulgación genera el riesgo mencionado.

- Hacer del conocimiento la solicitud de arbitraje, así como la respuesta a la solicitud, previo a que tal proceso se resuelva, conllevaría un **riesgo demostrable** a la debida conducción del expediente de arbitraje, puesto que implicaría divulgar de manera anticipada los hechos materia de controversia, los cuales sirven como medio probatorio, por lo que su publicidad afectaría la autonomía del cuerpo arbitral libre de injerencias externas al procedimiento. Además, en el artículo 30 del Reglamento de la Corte Arbitral, se establece que como principio general, se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los laudos dictados en el curso del arbitraje, así como la de toda la documentación que obre en el procedimiento y de cualesquier otros documentos presentados por otra parte litigante que no sean de dominio público, por lo que la divulgación de la información también afectaría la secrecía que la normatividad de la Corte mandata para el buen seguimiento del proceso.

- Derivado de que está pendiente la definición del caso, la sola divulgación de la información, representaría un **riesgo identificable** a la vulneración de la conducción del expediente identificado; ya que al conocer el alcance de su contenido, permitiría que actores ajenos al juicio, puedan inferir en el ánimo del juzgador, y consecuentemente, la difusión podría generar un riesgo para 1) el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes, 2) la autonomía de los árbitros seleccionados, y 3) la libertad deliberativa por parte de la autoridad decisora.

En conclusión, la **solicitud de arbitraje y la respuesta a la solicitud de arbitraje**, se considera información reservada, con fundamento en el artículo 113, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un periodo de **5 años**.

3. Las notas informativas, las actas de las mesas de control y las minutas, con fundamento en la fracción X del artículo 110 de la Ley de la materia:

- **Primer elemento:** se acreditó que dicho procedimiento arbitral cumple con las formalidades referentes al inicio del procedimiento, la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, y se concluye con la resolución en donde se emite la sentencia o laudo, por lo que se acredita el primer elemento necesario para que se actualice la hipótesis de reserva aludida por el sujeto obligado; es decir, que se trate de un expediente arbitral, por lo que se tiene por cumplido el primer elemento, que actualiza la hipótesis de clasificación prevista en el artículo 110, fracción X de la Ley de la materia.

- **Segundo elemento:** en la audiencia de acceso, se indicó que las partes en el procedimiento arbitral son esta CFE como demandada y la empresa ATCO como demandante. Asimismo, puso a la vista la solicitud arbitral, así como la respuesta a la solicitud que se presentó ante la Corte Arbitral.

- **Tercer elemento:** la información no es conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso. En el caso concreto, se debe referir que las notas informativas describen los conflictos generados y la atención que esta CFE realizó para la solución de los conflictos sociales derivados del desarrollo del gasoducto Ramal Tula, en el estado de Hidalgo, así como los avances logrados en su solución.

Asimismo, se relatan las acciones que se realizaron para la solución de los conflictos generados y contienen un apartado de consideraciones finales, en las que se describen de forma genérica los conflictos y las opiniones del servidor público de CFE de las posibles soluciones del conflicto.

Por su parte, las actas de la mesa de control describen hechos realizados por CFE para la solución de los conflictos generados por la construcción del gasoducto, objeto del contrato en pugna.

Por último, en las minutas se describe el seguimiento de los acuerdos en la problemática de la construcción del proyecto gasoducto Ramal- Tula; se desarrolla el estado físico y jurídico del proyecto, así como las etapas pendientes de la construcción de la obra. Asimismo, contiene las recomendaciones de la CFE a la empresa ATCO sobre la construcción de la obra y, en algunos casos, la CFE solicita información para el seguimiento del proyecto.

Se advierte que los documentos que se analizan, no son conocidos por la contraparte, por lo que se tiene por cumplido el tercer elemento de procedencia de la hipótesis de clasificación prevista en la fracción X del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-**Cuarto elemento:** Respecto a que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expidió el criterio siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", conforme al cual, las garantías del debido proceso consisten en el "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y que son las siguientes: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

En el caso que nos atañe, de proporcionar la información requerida, la garantía que se llegaría a violentar corresponde a la **oportunidad de ofrecer y desahogar** las pruebas en que se finque la defensa, lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado señaló que dichos documentos serán presentados dentro del procedimiento arbitral.

Por ello, en caso de la información que se analiza sea del dominio público, la empresa ATCO estaría en posibilidad de obtener una ventaja dentro del procedimiento al conseguir elementos que desvirtúen las pruebas que puede ofrecer la CFE dentro del procedimiento; lo anterior, con la finalidad de que la defensa del sujeto obligado no prospere, ni logren la reivindicación de sus derechos.

Asimismo, toda vez que los documentos que se analizan son probanzas que se ofrecerá dentro del juicio arbitral, si se afectaría el derecho de la entidad, para objetar las probanzas que exhibirá su contraparte próximamente, pues precisamente en los documentos analizados en este apartado constan elementos que le servirán para defenderse ante los elementos novedosos que, en su caso, haga valer su contraparte.

Por ello, tal publicidad, menoscabaría la oportunidad de la entidad, en dicha etapa procedimental, (desahogo de las pruebas en que se finque el procedimiento), menoscabando así el debido proceso, en perjuicio de esta CFE, que es parte en el procedimiento arbitral de referencia.

De esa forma, con la publicidad de la información que nos ocupa, se generaría un serio desequilibrio procesal, pues se provocaría una situación de desventaja para CFE.

Con base en esto, se tiene por cumplido el cuarto elemento de procedencia de la hipótesis de clasificación prevista en la fracción X del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Una vez precisado lo anterior, y al haberse actualizado los elementos previstos para dicha causal de reserva es importante puntualizar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Federal multicitada, las causales de reserva se deberán fundar y motivar, a través de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de Ley General de la materia.

Atento a ello, en el presente caso, respecto a la publicidad del nombre de los demandados en contra de los que se interpusieron nueve acciones colectivas, que se encuentran pendientes de admisión, se tiene que se realiza la siguiente prueba de daño:

- Se causaría un **riesgo real** en perjuicio del debido proceso, porque los documentos solicitados podrían constituir la base de la estrategia procesal de la CFE, por lo que de revelarlos se podría limitar o despojar a la entidad de tácticas futuras en el procedimiento, específicamente en materia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, lo que se traduciría en una afectación directa al debido proceso, específicamente por lo que hace a la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas.

- Existe un **riesgo demostrable**, toda vez que la empresa demandante conocería los documentos que CFE presentara como prueba, teniendo la oportunidad de obtener o elaborar elementos que las desvirtúen dentro del procedimiento arbitral, o en su caso, estar en posibilidad de modificar los hechos descritos en las pruebas, con el objeto de cambiar el sentido de la decisión arbitral.

- Se genera un **riesgo identificable** ya que se generaría un desequilibrio procesal, que colocaría al sujeto obligado en una situación de desventaja en el procedimiento arbitral; lo anterior es así, ya que permitiría a la empresa demandante prepararse de manera anticipada a la etapa de ofrecimientos de pruebas, en aras de impugnar la validez de las pruebas que pretende ofrecer el sujeto obligado.

Asimismo, se considera que el riesgo de perjuicio que supondría la difusión supera el interés público para que se conozca, porque podría afectarse la debida conducción del procedimiento arbitral, al vulnerarse la actuación del sujeto obligado como parte de su defensa. Es decir, se darían a conocer documentos vinculados directamente con la estrategia procesal de la entidad, pues éstos se relacionan directamente con la posibilidad de que éste objete y se defienda. Por lo que su entrega propiciaría un desequilibrio procesal, que colocaría al sujeto obligado en una situación de desventaja en el procedimiento administrativo.

Finalmente, se considera que la clasificación de la información es una **medida proporcional**, dado que la reserva de la información constituye una medida de restricción temporal cuya finalidad es salvaguardar el derecho de debido proceso del sujeto obligado, ya que la difusión de la información da cuenta de su estrategia procesal, por lo que al exponer dicha información a terceros se podría ocasionar un desequilibrio procesal, afectando directamente la conducción del expediente que se resuelve.

En consecuencia, los documentos referidos en éste apartado, actualizan la causal de **reserva** invocada por el sujeto obligado, con fundamento en lo dispuesto en el **artículo 110, fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, en relación con el Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales, ello por un periodo de **5 años**.

b) Proporcione al particular las constancias con las que cuente respecto de los expedientes de los juicios de amparo 1174/2015-III-A, 755/2015-V-A, 868/2015-II-A, 674/2015-II, y 695/2015-V-B: Se proporciona versión pública de los expedientes de juicio de amparo señalados, en los que se testaron:

Nombre de persona física: El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que éste per se es un elemento que identifica a una persona física.

En ese sentido, el nombre debe considerarse información confidencial, en virtud de que de otorgarse se estarían dando a conocer datos que requieren del consentimiento de sus titulares para su difusión, en virtud de que implícitamente se revelaría una decisión de carácter personal.

Edad/Fecha De Nacimiento: es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere a los años cumplidos por una persona física identificable.

Registro Federal de Causantes (persona física): En el caso del Registro Federal de Contribuyentes, cabe señalar que para su obtención es necesario acreditar previa y fehacientemente la identidad de la persona y su fecha de nacimiento, entre otros datos.

Las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.

En el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación se establece que utilizar una clave de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en materia fiscal. Lo anterior, toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada.

En ese sentido, el Registro Federal de Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, la cual es única e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que es un dato personal.

Nacionalidad: es un atributo de la personalidad que señala al individuo como miembro de un Estado, es decir, es el vínculo legal que relaciona a una persona con el Estado. En este sentido, la nacionalidad de una persona se considera como un dato personal, en virtud de que su difusión afectaría su esfera de privacidad.

Domicilio de persona física y moral: El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende, confidencial ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. Por consiguiente, dicha información es confidencial y sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso del titular de dichos datos personales.

Lo anterior por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública..." (Sic)

CONSIDERANDO

Los integrantes del Comité de Transparencia de la CFE, son competentes en términos de lo establecido en el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, para: confirmar las clasificaciones como confidencial y reservada; así como la versión pública.

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirma:

La clasificación como **información reservada** de: 1. Los expedientes de amparo 673/2015- 3, 1410/2015, 1335/2015-V, 2/2016-I-A, 891/2015-I-A, 1167/2015-II y 869/2015-III-A, en virtud de que éstos continúan en trámite, de conformidad con la fracción XI del artículo 110 de la Ley de la materia, por un plazo de **3 años**; 2. La solicitud de arbitraje y la respuesta a la solicitud de arbitraje, con fundamento en la fracción XI del artículo 110 de la Ley de la materia, por un plazo de **5 años**; 3. Las notas informativas, las actas de las mesas de control y las minutas, con fundamento en la fracción X del artículo 110 de la Ley de la materia, por un plazo de **5 años**.

2. La versión pública de las constancias con las que se cuenta respecto de los expedientes de los juicios de amparo 1174/2015-III-A, 755/2015-V-A, 868/2015-II-A, 674/2015-II, y 695/2015-V-B, en los que se testaron: Nombre de persona física; Edad/Fecha de nacimiento; Registro Federal de Contribuyentes (persona física); Nacionalidad; Domicilio de persona física y moral, por tratarse información confidencial (datos personales), ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO.- Se precisa que las clasificaciones como reservada y confidencial, así como la versión pública anteriormente señaladas fueron elaboradas y solicitadas por la Oficina del Abogado General.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las trece horas con treinta minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a la reunión.

Comité de Transparencia de la CFE

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas

Por instrucciones del Mtro. Diódoro J. Siller
Argüello, Coordinador de Proyectos
Especiales y Racionalización de Activos de

CFE,

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada

Titular de la Unidad de Transparencia

C. Carlos Alberto Peña Álvarez

Responsable del Área Coordinadora de Archivos.